

DÉCIMO PRIMERA SALA REGIONAL METROPOLITANA

ACTOR:

EXPEDIENTE:

22142/18-17-11-7

MAGISTRADA INSTRUCTORA:

**LICENCIADA MARÍA DE JESÚS
HERRERA MARTÍNEZ**

SECRETARIO:

**LICENCIADO JUAN CARLOS CORTÉS
HERNÁNDEZ**

JUICIO SUMARIO

SENTENCIA DEFINITIVA

1

Ciudad de México, a **veintisiete de febrero de dos mil diecinueve**.- La C. Magistrada **MARÍA DE JESÚS HERRERA MARTÍNEZ**, Instructora en el presente juicio; ante el Secretario de Acuerdos, que actúa y da fe, Licenciado **JUAN CARLOS CORTÉS HERNÁNDEZ**, en términos de lo dispuesto por el artículo 49 en relación con el diverso 58-13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, procede a dictar sentencia en el juicio de nulidad número **22142/18-17-11-7**, promovido por el C. *****
***** , en representación legal de ***** ,
en los siguientes términos;

R E S U L T A N D O

1º.- Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales Metropolitanas de este Tribunal el día 20 de septiembre de 2018, cual el C. *****

 , en representación legal de ***
 **, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio 900-03-05-00-00-2018-1222 de fecha 30 de julio del 2018 emitida por el Administrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades "5", dependiente de la Administración Central de Fiscalización a Grupos de Sociedad, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración, mediante la cual se impone una multa de \$52,120.00.

2º.- Mediante auto de fecha 27 de septiembre de 2018, se admitió a trámite la demanda de nulidad en vía sumaria, ordenándose que con copia de la demanda y anexos se corriera traslado a la autoridad demandada, para que produjera su contestación respectiva.

3º.- Mediante oficios número 900 09 04-2018-11220 y 900 09 04-2018-11274, presentados en la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales Metropolitanas los días 05 y 30 de noviembre de 2018, las autoridades demandadas produjeron su contestación de demanda, dándose cuenta de ellas mediante auto



de fecha **03 de diciembre de 2018**, concediéndosele a las partes el término de ley para formular sus alegatos por escrito.

4°.- Una vez transcurrido el término de Ley, quedó cerrada la instrucción sin necesidad de declaratoria expresa.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Esta Instrucción es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 58-1, 58-2, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente; 29, 30, 34 y 36 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor, así como los artículos 21, fracción XVII y 22, fracción XVII del Reglamento Interior de este Tribunal.

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada se encuentra debidamente acreditada en términos de lo dispuesto por los artículos 46 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, ya que la actora exhibió el original de dicho documento, mismo que fue reconocido por la autoridad demandada.

TERCERO.- Esta instrucción procede al estudio conjunto del primer y segundo conceptos de impugnación hechos valer por la actora en su escrito inicial de demanda, en los cuales esencialmente manifestó que la resolución impugnada es ilegal toda vez que se encuentra indebidamente fundada y motivada, contraviniendo el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en relación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que la actora al solicitar la prórroga para dar cumplimiento al oficio 900-03-05-00-00-2018-1053, mediante el escrito presentado el 04 de julio de 2018, manifestó que lo solicitado por la autoridad demandada resultaba difícil de proporcionar al tratarse de información y documentación que requiere cierto detalle específico, como papeles de trabajo, balanzas de comprobación e integraciones.

Que dentro del plazo que le fue concedido a la actora, no suministró en forma completa la información y documentación solicitada mediante el oficio 900-03-05-00-00-2018-1053 de fecha 04 de junio de 2018, por lo que se le impuso una multa en cantidad de \$52,120.00, prevista en la fracción I del artículo 86,



del Código Fiscal de la Federación; toda vez que el incumplimiento se encuentra tipificado como infracción fiscal, conforme a la fracción I, del artículo 85 del ordenamiento antes precisado.

Que en atención al citado requerimiento, mediante escrito presentado el 04 de julio de 2018, ante la Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, la actora solicitó prórroga para dar cumplimiento al oficio 900-03-05-00-00-2018-1053, con fundamento en el artículo 53 del Código Fiscal de la Federación.

Que la actora tenía derecho a solicitar y obtener la ampliación del plazo para desahogar el requerimiento contenido en el oficio número 900-03-05-00-00-2018-1053 de fecha 04 de junio de 2018, tal como se establece en el último párrafo del artículo 53 del Código Fiscal de la Federación, lo cual no aconteció, toda vez que la autoridad demandada resolvió que la información requerida no era de difícil obtención ya que forma parte de la contabilidad de la actora.

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del Código Fiscal de la Federación se debe atender a las circunstancias de hecho de cada sujeto obligado y estimar si existe un obstáculo para que el particular pueda conseguir y poner a

disposición de la autoridad, dentro del plazo otorgado, la información o documentación requeridas, a fin de calificar si existió o no una posible infracción.

Que, se insiste que el artículo 53 del Código Fiscal de la Federación no establece, como ilegalmente pretende la autoridad demandada, que el contribuyente deba acreditar en forma completa y suficiente los extremos de sus pretensiones y señalar de manera clara y pormenorizada, las razones por las cuales considera que la información requerida es compleja, de gran volumen o de difícil obtención.

Que en el presente caso no se actualiza el supuesto de infracción que refiere la autoridad, en virtud de que el artículo 86, fracción I, relacionado con la fracción I, del artículo 85 del Código Fiscal de la Federación, prevé que se actualiza la infracción relacionada con el ejercicio de facultades de comprobación, cuando el contribuyente no suministre los datos o informes que legalmente exijan las autoridades fiscales, así como cuando no se proporcione la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y en general, los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros.



Que en el caso concreto, no existió ánimo de incumplimiento al requerimiento formulado, toda vez que la actora solicitó la ampliación del plazo para presentar la documentación e información solicitada por la autoridad, con fundamento en el artículo 53 del Código Fiscal de la Federación.

Por su parte, al formular su contestación a la demanda, la autoridad traída a juicio sostuvo la legalidad de la resolución impugnada.

A juicio de esta Instrucción, los conceptos de impugnación hechos valer por la actora son infundados con base en las siguientes consideraciones:

En primer lugar resulta necesario señalar que en el presente asunto ***** (*****
*****), demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio 900-03-05-00-00-2018-1222 de fecha 30 de julio del 2018 emitida por el Administrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades "5", dependiente de la Administración Central de Fiscalización a Grupos de Sociedad, de la Administración General de

Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración, mediante la cual se impone una multa de \$52,120.00.

A efecto de resolver la litis planteada, la suscrita Magistrada considera pertinente precisar los hechos que dieron lugar a la resolución impugnada, los cuales son del tenor siguiente:

1. Mediante oficio número 900-03-05-00-00-2018-1053 de fecha 04 de junio de 2018, la Administración de Fiscalización a Grupos de Sociedades "5" de la Administración Central de Fiscalización a Grupos de Sociedades de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, solicitó a ***** ***** *** ***** ***** ** ***** , documentación e información respecto del ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012.

2. Por escrito presentado el 04 de julio de 2018, la empresa actora, solicitó una prórroga para dar cumplimiento al requerimiento formulado mediante el oficio 900-03-05-00-00-2018-1053 de fecha 04 de junio de 2018.



3. Por oficio número 900-03-05-00-00-2018-1214 de fecha 11 de julio de 2018, la autoridad demandada determinó negar la prórroga solicitada por la accionante, en virtud de que a su consideración, la información requerida no era de difícil obtención (foja 169).

4. Mediante escrito presentado el 13 de julio de 2018, la empresa proporcionó diversa información y documentación a efecto de desahogar el requerimiento formulado mediante oficio 900-03-05-00-00-2018-1053.

5. Mediante oficio número 900-03-05-00-00-2018-1222 de fecha 30 de julio de 2018, emitido por el Administrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades "5", dependiente de la Administración Central de Fiscalización a Grupos de Sociedades, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, se le impuso a *****
** ****, una multa en cantidad de \$52,120.00, al no haber suministrado supuestamente en forma completa la información y documentación solicitada por la autoridad demandada mediante oficio 900-03-05-00-00-2018-1053 de fecha 04 de junio de 2018 (foja 38 de autos)

En virtud de lo anterior, a juicio de la suscrita Magistrada, no le asiste la razón a la parte actora, toda vez que los fundamentos y motivos utilizados por la autoridad demandada en la resolución impugnada, no resultan ilegales.

Se dice lo anterior, toda vez que la autoridad demandada determinó que la actora no proporcionó la información y documentación que le fue requerida en el oficio número 900-03-05-00-00-2018-1053 de fecha 04 de junio de 2018, señalando que al no proporcionar la citada información, dentro del plazo establecido en el artículo 53, inciso c) del Código Fiscal de la Federación vigente, concluyó que la accionante contravino lo dispuesto por el artículo 42, primer párrafo, fracción II, en relación con el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, ubicando su conducta en la hipótesis prevista en el artículo 85, primer párrafo fracción I, de dicho Código, haciéndose acreedor a la multa mínima de \$52,120.00, establecida en la fracción I del artículo 86 del referido ordenamiento, que a la letra señalan:

“Artículo 85.- Son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación las siguientes:

I. Oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal. **No suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales;** no proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y en general, los elementos que se requieran para



comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros, o no aportar la documentación requerida por la autoridad conforme a lo señalado en el artículo 53-B de este Código.

...

Artículo 86.- A quien cometa las infracciones relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el Artículo 85, se impondrán las siguientes multas;

I. De \$17,370.00 a **\$52,120.00**, a la comprendida en la fracción I.

..."

(El énfasis es propio)

De la transcripción anterior, se advierte que se infraccionara a quien, entre otros supuestos, no suministre los datos e informes que legalmente soliciten las autoridades fiscales, haciéndose acreedor a una multa de \$17,370.00 a \$52,120.00.

Ahora bien, en el presente caso la parte actora para poder dar cumplimiento en forma al requerimiento de información y documentación hecho por la autoridad demandada, a través del oficio número 900-03-05-00-00-2018-1053 de fecha 04 de junio de 2018, solicitó una prórroga en términos del artículo 53, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, mismo que a la letra dispone:

"Artículo 53.- En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación, las autoridades fiscales soliciten éstos, informes o documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, se estará a lo siguiente:
Se tendrán los siguientes plazos para su presentación:

a) Los libros y registros que formen parte de su contabilidad, solicitados en el curso de una visita, deberán presentarse de

inmediato, así como los diagramas y el diseño del sistema de registro electrónico, en su caso.

b) Seis días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva, cuando los documentos sean de los que deba tener en su poder el contribuyente y se los soliciten durante el desarrollo de una visita.

c) Quince días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva, en los demás casos.

Los plazos a que se refiere este inciso, se podrán ampliar por las autoridades fiscales por diez días más, cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención...”

(El énfasis es propio)

Lo anterior es así, toda vez que la accionante manifestó que la información y documentación requerida por la autoridad demandada, resultaba de difícil obtención, al tratarse de información y documentación que requiere de cierto detalle específico, como papeles de trabajo, balanzas de comprobación e integraciones.

Sin embargo, a juicio de esta juzgadora, la información y documentación que fue requerida por la autoridad demandada, a través del oficio 900-03-05-00-00-2018-1053 de fecha 04 de junio de 2018, no resulta ser de difícil obtención, toda vez que forman parte de su contabilidad, por lo que la actora tiene la obligación de tenerla a su disposición, en términos del artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, mismo que a la letra dispone:



“Artículo 86. Las personas morales a que se refiere este Título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes:

- I. Llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley y efectuar registros en los mismos respecto de sus operaciones.
...”

Asimismo, debe tenerse en cuenta que los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad, deberán tener la documentación comprobatoria de sus registros o asientos que la integran, disponible en su domicilio fiscal, tal y como lo dispone el artículo 28, fracción III del Código Fiscal de la Federación, mismo que señala:

“Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente:

- I. Para efectos fiscales, la contabilidad se integra por:

- A. Los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código se establecerá la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción, y los elementos adicionales que integran la contabilidad.

B. Tratándose de personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, incluyendo almacenamiento para usos propios, distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, además de lo señalado en el apartado anterior, deberán contar con los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos, así como con dictámenes emitidos por un laboratorio de prueba o ensayo, que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero, de que se trate, y el octanaje en el caso de gasolina. Se entiende por controles volumétricos de los productos a que se refiere este párrafo, los registros de volumen, objeto de sus operaciones, incluyendo sus existencias, mismos que formarán parte de la contabilidad del contribuyente.

Los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos serán aquéllos que autorice para tal efecto el Servicio de Administración Tributaria, los cuales deberán mantenerse en operación en todo momento.

Los contribuyentes a que se refiere este apartado están obligados a asegurarse de que los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos operen correctamente en todo momento. Para tal efecto, deberán adquirir dichos equipos y programas, obtener los certificados que acrediten su correcta operación y funcionamiento, así como obtener los dictámenes de laboratorio señalados en el primer párrafo de este apartado, con las personas que para tales efectos autorice el Servicio de Administración Tributaria.

Los proveedores de equipos y programas para llevar controles volumétricos o para la prestación de los servicios de verificación de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos, así como los laboratorios de prueba o ensayo para prestar los servicios de emisión de dictámenes de las mercancías especificadas en el primer párrafo de este apartado, deberán contar con la autorización del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto éste emita.

El Servicio de Administración Tributaria revocará las autorizaciones a que se refieren los párrafos anteriores, cuando en los supuestos previstos en las reglas señaladas en el párrafo anterior, se incumpla con alguna de las obligaciones establecidas en la autorización respectiva o en este Código.



Las características técnicas de los controles volumétricos y los dictámenes de laboratorio a que se refiere este apartado, deberán emitirse de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, tomando en consideración las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos expedidas por la Comisión Reguladora de Energía.

Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que establezca el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria.

Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos conforme lo establezcan el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente.

IV. Ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con reglas de carácter general que se emitan para tal efecto."

En virtud de lo anterior, si bien la accionante considera que la información y documentación requerida por la autoridad demandada resulta ser de difícil obtención, lo cierto es que la misma forma parte de su contabilidad y por lo tanto tenía la obligación de tenerla a disposición en su domicilio fiscal.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis No. VIII-J-1aS-53, emitida por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en su Revista cuyos

datos de localización son Octava Época. Año III. No. 28. Noviembre 2018. p. 51:

“VISITA DOMICILIARIA. DOCUMENTOS OBJETO DE LA MISMA SUJETO A REVISIÓN POR AUTORIDADES FISCALES. De conformidad con los artículos 38, fracción IV, 42, fracción III y 45 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, podrán revisar su contabilidad, bienes y mercancías, en relación con el objeto de la orden de visita, la que debe contener entre otros elementos las contribuciones y el periodo sujeto a revisión; mientras que por otro lado, es obligación de los visitados, permitir a los visitantes el acceso al lugar o lugares objeto de esta, de mantener a su disposición en el domicilio la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales. En este orden de ideas, las autoridades fiscales tienen la facultad de requerir toda la documentación que desconoce y con la que el contribuyente acredite el cumplimiento de sus obligaciones fiscales relacionadas con el objeto de la visita domiciliaria, en virtud de que no es jurídicamente posible que se limite la documentación sujeta a revisión, pues se reitera dicha documentación debe ser toda aquella con la que el contribuyente acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales.”

Es por lo anterior, que resulta evidente que la información y documentación requerida a la accionante, no resultaba de difícil obtención, ya que la misma forma parte de su contabilidad, la cual tiene la obligación de mantener durante un periodo de cinco años, contados a partir de la fecha en la que se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con



ellas relacionadas, tal y como lo dispone el artículo 30, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, que a la letra señala:

“Artículo 30. Las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla a disposición de las autoridades fiscales de conformidad con la fracción III del artículo 28 de este Código.

Las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en su domicilio a disposición de las autoridades, toda documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

La documentación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo y la contabilidad, deberán conservarse durante un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en la que se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas. Tratándose de la contabilidad y de la documentación correspondiente a actos cuyos efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, el plazo de referencia comenzará a computarse a partir del día en el que se presente la declaración fiscal del último ejercicio en que se hayan producido dichos efectos. Cuando se trate de la documentación correspondiente a aquellos conceptos respecto de los cuales se hubiera promovido algún recurso o juicio, el plazo para conservarla se computará a partir de la fecha en la que quede firme la resolución que les ponga fin. Tratándose de las actas constitutivas de las personas morales, de los contratos de asociación en participación, de las actas en las que se haga constar el aumento o la disminución del capital social, la fusión o la escisión de sociedades, de las constancias que emitan o reciban las personas morales en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta al distribuir dividendos o utilidades, de la información necesaria para determinar los ajustes a que se refieren los artículos 22 y 23 de la ley citada, así como de las declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio, de las contribuciones federales, dicha documentación deberá conservarse por todo el tiempo en el que subsista la sociedad o contrato de que se trate.
...”

Por otra parte, no le asiste la razón a la actora cuando manifiesta que deviene ilegal la resolución impugnada, toda

vez que no existió intención de incumplir con el requerimiento formulado, al haber solicitado una prórroga.

Lo anterior es así, toda vez que si bien la accionante solicitó una prórroga para dar cumplimiento a lo solicitado por la autoridad, en términos del artículo 53 del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que no se ubicó en ninguno de los supuestos consagrados en dicho precepto legal, pues no basta con que manifestara simplemente que resultaban dichas documentales de difícil obtención, ya que no demostró con algún medio probatorio su dicho.

Asimismo, deviene **infundado** el argumento de la actora en el sentido de que la autoridad demandada tenía la facultad de requerir por segunda ocasión la información y documentación solicitada a la accionante, toda vez que se insiste que la actora no dio cabal cumplimiento al requerimiento formulado mediante oficio número 900-03-05-00-00-2018-1053 de fecha 04 de junio de 2018, haciéndose acreedor a una multa en cantidad de \$52,120.00, en términos del artículo 86, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, por lo que la autoridad no se encontraba obligada a realizar un segundo requerimiento.



CUARTO.- La suscrita Magistrada procede al análisis del tercer concepto de impugnación hecho valer por la accionante en su escrito inicial de demanda, donde esencialmente manifestó que toda vez que la resolución impugnada a través de los conceptos de impugnación primero y segundo del mismo escrito, es ilegal, se le debe reconocer el derecho subjetivo a la devolución del pago de lo indebido, derivado de la multa contenida en el oficio 900-03-05-00-00-2018-1222, en términos de lo dispuesto por los artículos 17-A, 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación.

En relación con el citado argumento, al contestar la demanda, la enjuiciada sostuvo la legalidad de su actuación.

A juicio de la suscrita Magistrada el argumento en estudio es **infundado**, toda vez que como quedó demostrado párrafos arriba, la resolución contenida en el oficio 900-03-05-00-00-2018-1222 de fecha 30 de julio del 2018 signada por el Administrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades "5", dependiente de la Administración Central de Fiscalización a Grupos de Sociedad, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración, mediante la cual se impuso *****

*****, una multa en cantidad de \$52,120.00, se emitió en apego

a derecho; razón por la que no puede reclamar la devolución del pago realizado por concepto de la misma.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 49, 50 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve:

I.- La parte actora **no probó** su acción en consecuencia.

II.- **SE RECONOCE LA VALIDEZ** de la resolución impugnada, misma que ha quedado precisada en el Resultando Primero de este fallo.

III.- **NOTIFÍQUESE.**

Así lo resolvió y firma la Magistrada Instructora en el presente juicio, **LICENCIADA MARÍA DE JESÚS HERRERA MARTÍNEZ**, ante el Secretario de Acuerdos Licenciado **JUAN CARLOS CORTÉS HERNÁNDEZ**, que actúa y da fe.

Mag. María de Jesús Herrera Martínez
Instructora de la Primera Ponencia

JCCH/agh

Lic. Juan Carlos Cortés Hernández
Secretario de Acuerdos de la Primera Ponencia



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

DÉCIMO PRIMERA SALA REGIONAL METROPOLITANA

***** ***** *** ***** ***** ** *****

EXPEDIENTE: 22142/18-17-11-7

21

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia la *denominación de la demandante y el nombre de su representante legal*, información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente”